



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 1

Avda Pedro San Martín S/N

Santander

Teléfono: 942346969

Fax: 942322491

Modelo: C1920

**Proc.: APELACIÓN SENTENCIAS
PROCEDIMIENTO ABREVIADO**

Nº: 0000061/2017

NIG: 3908741220130014095

Resolución: Sentencia 000080/2017

Procedimiento Abreviado 0000233/2016 - 00
JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 de Santander

Intervención:	Interviniente:	Procurador:
Apelante		FRANCISCO JAVIER CALVO GÓMEZ
Apelado		LUISA MARÍA DÍAZ GÓMEZ

SENTENCIA Nº 000080/2017

ILMOS. SRES. :

Magistrados :

D^a. PAZ ALDECOA ALVAREZ SANTULLANO.

D^a. MARIA RIVAS DIAZ DE ANTOÑANA.

D. ERNESTO SAGÜILLO TEJERINA.

En Santander, a Veinte febrero de dos mil dieciséis.

Este Tribunal, constituido por los Ilmos. Sres. Magistrados del margen, ha visto en grado de apelación la presente causa penal, seguida por los trámites del juicio rápido, procedente del JUZGADO de lo PENAL Nº2 de SANTANDER, seguido con el número 233/16 Rollo de Sala Nº 61/17, contra cuyas demás circunstancias personales ya constan en la Sentencia de instancia, representados por el procurador Sr. Calvo Gómez y defendido por la letrada Sra. Fernández González, habiendo sido acusación particular en dicha causa representado por la procuradora Sra. Díaz Gomes y dirigido por el letrado Sr. Alvarez Murias.

Siendo parte apelante en esta alzada y partes apeladas el Ministerio Fiscal y con la representación y defensa ya aludida.



Es Ponente de esta resolución la Ilma. Sra. Magistrada de esta Sección Primera, Dña. PAZ ALDECOA ALVAREZ-SANTULLANO, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los de la sentencia de instancia,

y

PRIMERO : En la causa de que el presente Rollo de Apelación dimana, por el JUZGADO DE lo PENAL N°2 de SANTANDER se dictó sentencia en fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciseis, cuyo relato de hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente :

"Primero.- Que el acusado , mayor de edad, y sin antecedentes penales, el día 1 de junio de 2011 alquiló a el establecimiento denominado , ubicado en el n.º de la c/ de Cartes.

Segundo.- El acusado sabiendo que tenía que abandonar el lugar, por un desahucio, del que se le había notificado la fecha de lanzamiento acordada para el 16 de diciembre de 2013, en ejecución de la sentencia firme dictada en fecha 2 de septiembre de 2013, desmontó previamente a que se materializara el lanzamiento el tejado de un comedor, las terrazas, aseos y cocinas, tiro tabiques, arranco las instalaciones eléctricas, los radiadores y canalones, hizo agujeros y rayones en el suelo, causando daños que han sido valorados pericialmente en un total de 98.345,96 euros desglosados de la siguiente forma: - 42.025,96 euros correspondientes al comedor-barbacoa exterior adosado al muro oeste del recinto. - 17.090 euros por la terraza exterior pérgola semicerrada frente al edificio anexo. - 8.360 euros por la terraza exterior pérgola abierta frente al edificio principal. - 13.795 euros por el bar exterior planta baja edificio anexo. - 1.820 euros por el aseo exterior independiente frente a edificación principal. - 6.705 euros por el bar interior planta baja edificio principal. - 800 euros por el aseo interior planta baja edificación principal. - 6.650 euros por cocina planta baja edificio principal. - 1.100 euros por desperfectos puntuales en edificación principal (suministro y colocación de hogar para encastrar en chimenea de obra y bañera circular). **Tercero.-** Así mismo, el acusado causo desperfectos en aseo exterior, barandillas, bombas y radiadores que no han sido objeto de tasación por el perito judicial y que según informe presentado por el perjudicado ascienden a 4370 euros . **FALLO: DEBO CONDENAR Y CONDENO a**

Como autor penalmente responsable de un delito de



DAÑOS previsto y penado en el artículo 263 del Código Penal, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de **DIEZ MESES DE MULTA** a razón de una cuota diaria de SEIS (6.-) EUROS con arresto legal sustitutorio en caso de impago imponiéndole las costas procesales. Por vía de responsabilidad civil el condenado indemnizará a

en la cantidad de 98.345,96.- € por los daños causados con los intereses del art. 576 de la LEC."

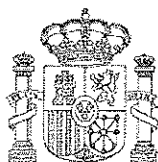
SEGUNDO : Por [redacted] con la representación y defensa aludidas, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite en virtud de providencia del Juzgado dictada al efecto, y dado traslado del mismo a las restantes partes, se elevó la causa a esta Audiencia Provincial, Sección Primera, en la que tras su examen, se ha deliberado y fallado el recurso.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia de Instancia, anteriormente reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO : Frente a la sentencia de instancia, que condena [redacted] como autor de un delito de daños se alza en apelación el condenado Sr. [redacted] alegando en esencia error en la valoración de la prueba por considerar que no ha habido prueba suficiente de la autoría de los daños y que además no se ha valorado correctamente por el Juzgador la prueba que ha sido practicada en el Plenario; solicitando que se le absuelva del delito por el que ha sido condenado. El Ministerio Fiscal solicitó la confirmación de la sentencia como igualmente lo hizo la representación procesal del Sr. [redacted].



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

SEGUNDO : Como ya se ha dicho, el motivo principal del recurso se basa en la consideración de que la prueba que en el acto del juicio se ha practicado y que consistió básicamente en las declaraciones del acusado y en el testimonio del perjudicado así como del testigo Sr. , los informes periciales ratificados por quienes los emitieron Arquitecto Sr . (informe folio 223) y perito judicial nº15207 (folio 277) así como la documental consistente en la diligencia de toma de posesión redactada por el Secretario del Juzgado de Paz de Cartes (folios 20 y 21) y las actas notariales obrantes a los folios 22 a 58 de la causa, no ha sido valorada correctamente por el Juzgador quien, siempre según el, ha llegado a conclusiones erróneas. En esencia lo que sustenta es que no hay acreditación de que él hubiera sido quien ocasionó los destrozos comprobados en las instalaciones del local arrendado, apuntando que su única intervención en los hechos consistió en la retirada del mobiliario que había sido por él dispuesto en el local objeto del arriendo para la explotación de su negocio.

En este punto, ha de recordarse que tal como la Jurisprudencia ha reiterado, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre tratándose del interrogatorio de la persona acusada (sin entrar en su discutida naturaleza probatoria) o de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su credibilidad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone en virtud del principio de inmediación de esos conocimientos, en



tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación no se encuentra en tal disposición.

Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador en primera instancia salvo cuando el error de valoración sea patente.

En todo caso la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida por el juez a quo, se debe concretar a la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica (TC SS 17-12-85 [RTC 1985\174], 13-6-86 [RTC 1986\78], 13-5-87 [RTC 1987\55], 2-7-90 [RTC 1990\124], 4-12-92 [RJ 1992\10012], 3-10-94 [RJ 1994\7607]), y únicamente debe ser rectificada, bien cuando no existe al imprescindible marco probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando un detenido examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgador «a quo» de tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios



contrarios a los preceptos constitucionales. (SS TC 1-3-93 [RTC 1993\79], S. TS 29-1-90 [RJ 1990\527]).

En el presente supuesto, la Sala considera que el Juez a quo efectuó una valoración totalmente correcta, no existiendo duda razonable ninguna de que fue el Sr. _____ quien ocasionó los daños en las instalaciones arrendadas.

Ciertamente, y ello porque ha habido prueba más que suficiente para llegar a tales conclusiones.

En efecto cual era el estado del local de negocio vigente el contrato de arriendo consta de modo más que suficientemente acreditado no sólo de las declaraciones que en tal sentido prestó el Sr. _____, sino fundamentalmente del acta notarial de fecha quince de octubre de dos mil doce al que se incorporan una serie de fotografías harto ilustrativas de ello. Como quedó al cese del contrato y en el momento de la toma de posesión resulta incuestionable de la diligencia de la toma de posesión de la Secretaria del Juzgado de Paz de fecha 16/12/13 y muy fundamentalmente del acta de presencia notarial de fecha 12/12/13 a la que igualmente se adjuntan fotografías evidenciadoras de los destrozos ocasionados en las edificaciones arrendadas. Su importe de reparación consta determinado del informe del arquitecto Sr. _____ así como del emitido por el perito judicial designado.

Consta pues plenamente probada la realidad del daño y, de los elementos de prueba ya citados, ha de compartirse el criterio del Magistrado a quo que su causación no se corresponde con la, alegada por el acusado retirada de los muebles por él usados en la explotación de su actividad, o a retirar los equipos separables del local, sino que como expresamente señaló



el perito Sr. . y así se evidencia del reportaje fotográfico, tiene como origen un auténtico desmantelamiento de las instalaciones del local con eliminación de elementos estructurales (tejados, barandillas, estructuras de madera tejavanas...) arrancamiento de sanitarios y elementos de fontanería e instalaciones eléctricas que exceden con mucho de lo pretendido por aquel y que ocasionó múltiples desperfectos que por su naturaleza y gravedad evidencian un propósito malintencionado de dañar a la propiedad arrendadora.

Y finalmente la autoría del acusado consta suficientemente acreditada. No sólo los testigos Sr. . y Sr. . mantuvieron haberle visto retirando tejas de la cubierta, sino que su autoría resulta de que era él quien estaba en posesión del local en su condición de arrendatario del mismo y quien por tanto tenía plena oportunidad de ejecutar los hechos causantes de los daños comprobados cuando el propietario tomó posesión del local sino que, además, que fue él quien parcialmente lo admitió al reconocer haber retirado lo que él instaló en la propiedad, aduciendo que la recibió en pésimo estado, viéndose precisado a efectuar obras generales de acondicionamiento del mismo, procediendo a la conclusión del arriendo (ciertamente litigioso ya que concluyó por sentencia de desahucio de 2/09/13 a efectuar un total desmantelamiento de los elementos instalados, con vulneración de lo estipulado contractualmente (contrato de arriendo de fecha 1/06/11) así como lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos y que indefectiblemente causó daños cuantiosos con una clara intencionalidad de perjudicar a la propiedad.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Por tanto y conforme a todo lo razonado y ante la contundencia de las pruebas anteriormente reseñadas, ha de compartirse el criterio valorativo del Magistrado a quo y el motivo único del recurso centrado en alegar errónea valoración de la prueba no puede prosperar.

TERCERO : Las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han de ser impuestas al apelante al ser su recurso desestimado.

Por cuanto antecede, VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en ejercicio de la potestad jurisdiccional conferida por la Soberanía Popular y en nombre de Su Majestad El Rey,

FALLAMOS :

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de [redacted] contra la sentencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis dictada por el Juzgado de lo Penal N° 2 de Santander, en los autos de Juicio Oral N° 233/16, a que se contrae el presente Rollo de Apelación, debemos confirmar y confirmamos la misma en su integridad con imposición al apelante de las costas de la alzada.

Y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.